

Hace 40 años, en su edición número 295, correspondiente a mayo de 1967, *SIC* ofrecía una amplia cobertura de la encíclica *Populorum Progressio*, que recién había dado a conocer públicamente el papa Paulo VI. Además de extractos del documento, y de artículos analíticos, también el editorial se centraba en las exigencias que emanaban de la carta, especialmente para una sociedad como la venezolana, en la que los abismos sociales resultaban más que palpables, y estamos hablando de cuatro décadas atrás. En concreto, se veía como imprescindible acortar la brecha social, “en esta Venezuela de terribles contrastes”, y en esa dirección se echaba mano del comunicado papal, para insistir en la necesidad de que las políticas gubernamentales se orientaran de forma vigorosa hacia los más pobres con la construcción de escuelas, hospitales y viviendas dignas.

Asimismo, se defendía a la encíclica, que fue objeto de enconadas críticas, pues incluso se le catalogó de “marxismo recalentado”. Para *SIC*, la *Populorum Progressio* respondía cabalmente al llamado cristiano por una justicia social, y por tal razón era lógico defenderla especialmente de las críticas que le hicieron desde grandes centros del poder económico. Tales cuestionamientos no eran casuales, la carta papal dejaba claramente asentada la responsabilidad de los más ricos y fustigaba el modelo capitalista. Ello, para nada, significaba comulgar con el socialismo real que precisamente ahogaba a las voces de los creyentes y a las libertades en la Europa oriental y la hoy extinta Unión Soviética. La encíclica pedía una reorientación de la conducción económica, y para ello clamaba que se colocara al ser humano —y su pleno bienestar— como centro de cualquier modelo de desarrollo.

Por otra parte, en su edición 495, de mayo de 1987, *SIC* daba cuenta de las reformas al sistema político venezolano. Más allá de recoger los principales aportes que en ese momento realizaba la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), Arturo Sosa reflexionaba también sobre la naturaleza de los partidos políticos de nuestro

país y su forma de entender la acción gubernamental. Tanto AD como COPEI, históricamente, vieron al Estado como una suerte de instrumento para adelantar sus proyectos y programas. Ello generaba, y el esquema parece repetirse hoy, dos dimensiones: por un lado, una política extractiva que buscaba elevar al máximo posible la renta que percibía el Estado por la explotación petrolera; a lo cual se le unía como cara externa, hacia la sociedad, una función política de redistribución de aquella renta. En aquel momento ya se veía inviable, según se desprendía de estudios y reflexiones, mantener un esquema en el cual el Estado —por sí solo— financiara la modernización del país.

Hace seis años, en tanto, en el número 634 de *SIC*, Pedro Trigo repasaba el contexto político venezolano, en el cual era ya palpable la polarización y las visiones confrontadas sobre el manejo político del país. El texto, hecho a partir de algunos estudios de opinión, por un lado puntualizaba los factores en los que se basaba (y se basa ahora) la popularidad del presidente Chávez, al tiempo que también reflejaba crudamente los retos de pensar la realidad venezolana con claves más complejas que la histeria que parecía instalada, en aquel 2001, en los sectores medios del país. Las razones del apoyo popular al presidente están en claves simbólicas: con Chávez los pobres cobran existencia y con el jefe de Estado tienen esperanza. El artículo daba cuenta de una ruptura social significativa en Venezuela: “Hay más de un 35% por el lado de los de abajo, y casi un 20% del lado de los de arriba, que se perciben a sí mismos no sólo como distintos sino como difícilmente componibles entre sí”.

* Miembro del Consejo de Redacción



Las exigencias de la *Populorum Progressio*

Andrés Cañizález*